



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

Dirección General de Urbanismo

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE CELEBRAR EL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA Y MEMORIAS VALORADAS, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS Y FUNCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, VINCULADOS A ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA QUE SUBSIDIARIAMENTE SE EJECUTARÁN DESDE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EXPEDIENTE: A/SER-033623/2024

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, dedica su Título V a la Disciplina Urbanística y establece, en los artículos 193 y siguientes, medidas de protección de la legalidad urbanística que pueden implicar la demolición de edificaciones y realización de actuaciones de restauración de terrenos y su ejecución subsidiaria por la administración.

Las competencias en materia de disciplina urbanística y, en concreto en relación con estas actuaciones, corresponden a los municipios tanto por atribución de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su art. 25.2.a) como por la propia Ley del Suelo autonómica en sus artículos 194 y 195.

No obstante, la normativa prevé la posibilidad de subrogación en esas competencias municipales de la Comunidad de Madrid.

Dentro de la organización administrativa de la Comunidad de Madrid, la adopción de las medidas en el orden administrativo tendentes al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida establecidas en el Título V de la Ley 9/2001 están delegadas en la persona titular de la Dirección General de Urbanismo, de conformidad con la ORDEN 984/2024, de 15 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias y la firma de convenios, se desconcentra el protectorado de fundaciones y se designa con carácter permanente a los miembros de las Mesas de Contratación de la Consejería (BOCM N° 72 de 25 de marzo de 2024).

Por otro lado, el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid para el cuatrienio 2021-2024 aprobado mediante ORDEN 656/2021, de 30 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad y publicado en el BOCM núm. 88 de 14 de abril de 2021, expone en su preámbulo: *“Necesariamente se mantiene como fin primordial de la actividad inspectora el de complementar la acción de los Órganos Judiciales y del Ministerio Fiscal, tanto en la emisión de informes y dictámenes que se soliciten, en la realización de actividades de inspección, como en el cumplimiento de las resoluciones judiciales que reclaman el auxilio judicial para la debida ejecución de las sentencias que se dicten ordenando la reposición de la realidad física alterada.”* En el apartado 2 de su dispositivo segundo *“De los objetivos del Plan de Inspección”* establece que *“la Inspección Urbanística de la Comunidad de Madrid prestará la colaboración requerida por los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y Guardia Civil, en el ejercicio de sus respectivas potestades y funciones.”* Y en el apartado g) de su dispositivo tercero *“Principales líneas de actuación del Plan de Inspección”* señala, como una de ellas, la

“emisión de los informes que se requieran por los órganos judiciales, Ministerio Fiscal, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, y actuaciones que permitan cumplimentar el auxilio que fuera requerido por el órgano judicial competente en la ejecución de las resoluciones judiciales, en concreto en la ejecución de demoliciones ordenadas en sentencias penales firmes.”

La Comunidad de Madrid, pues, y en concreto la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística, en ejercicio de las competencias apuntadas, ha de promover obras de demolición de edificaciones ilegales y de restauración de los terrenos para cuya ejecución material se precisa, además, la previa redacción de proyectos o memorias valoradas, y la dirección facultativa de la ejecución de esas obras y el desempeño de las funciones precisas en materia de seguridad y salud.

La Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística carece de medios propios para poder acometer las actuaciones antes descritas, por lo que ha de recurrir a medios externos sirviéndose de los instrumentos previstos en la normativa de contratación pública, dado que estos contratos están incluidos en el ámbito de aplicación que la LCSP delimita en su artículo 2 al tratarse de contratos onerosos celebrados por una administración autonómica.

Es de interés público que se ejecuten las resoluciones administrativas y judiciales, lo que se lleva a efecto, en el caso de oposición o imposibilidad de los obligados, a través de los recursos humanos y materiales de, en este caso, la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística y las distintas unidades administrativas de contratación, y de medios externos con sujeción a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE (LCSP).

Es de capital importancia para la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística que se dé cumplimiento de manera ágil a las resoluciones judiciales o administrativas firmes, en primer lugar por tratarse de la reacción al concreto delito o infracción y en segundo lugar, tal y como establece el plan de inspección, como medio ejemplificador e instrumental para salvaguardar los bienes más dignos de protección frente a las múltiples irregularidades urbanísticas que, si bien son más numerosas en determinadas zonas, se detectan por toda la Comunidad.

Hay que tener en cuenta que la programación de las actuaciones no depende del propio funcionamiento de la Subdirección sino, en gran medida, de las resoluciones judiciales que las preceden: tanto sentencias penales como autorizaciones de entrada en domicilio dictadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo que son necesarias en la mayoría de los casos, factores externos que determinan las posibilidades de actuación así como su calendario tanto por ser, en la mayoría de los casos, un antecedente necesario de la ejecución subsidiaria de las obras como por el breve plazo que en ellas habitualmente se establece.

Las características de los procedimientos de ejecución subsidiaria de obras de restauración de la legalidad urbanística justifican acudir a medios que racionalicen, ordenen y agilicen, en la medida de lo posible, la actuación administrativa. Dichos procedimientos son complejos y sujetos a breves plazos, judiciales en la mayoría de los casos, que no encajan con los plazos establecidos en la normativa de contratación.



Por todo ello, de entre los medios establecidos para la racionalización y ordenación de la adjudicación de contratos públicos, el Acuerdo Marco, regulado en los art. 219 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) se considera adecuado, dado que mediante su conclusión con una única empresa se fijarán las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos basados que sea necesario adjudicar durante su período, en este caso dos años prorrogables por otros dos, en particular por lo que respecta a los precios, y con ese único interlocutor se podrán llevar cabo las actuaciones necesarias con sujeción a los plazos de los procedimientos administrativos y judiciales.

El presente Acuerdo Marco tendrá una duración de dos años prorrogables por otros dos, hasta un máximo de cuatro, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

A la vista de todo lo expuesto, como titular de las competencias atribuidas a esta Dirección General de Urbanismo conforme al artículo 10. a) de la *ORDEN 984/2024, de 15 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior* (BOCM N° 72 de 25 de marzo de 2024), por el que se delega la *adopción de las medidas en el orden administrativo tendentes al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida establecidas en el Título V de la Ley 9/2001*, careciendo de medios propios para la ejecución subsidiaria de obras de demolición descritas y resultando necesario acudir a la contratación de determinados **servicios vinculados** a estas obras (**redacción de proyectos de obra y memorias valoradas, dirección facultativa de obras y funciones en materia de seguridad y salud**), de entre los medios legalmente previstos para simplificar y agilizar su tramitación, considero adecuada y necesaria la adopción del presente Acuerdo Marco.

En Madrid, a fecha de firma
LA DIRECTORA GENERAL DE URBANISMO

Firmado digitalmente por: SARA EMMA
ARANDA PLAZA - [REDACTED]
Fecha: 2024.09.17 15:44